



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN:	11001-33-35-026-2017-00114-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LESIVIDAD
ACTOR:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
OPOSITOR:	PRUDENCIO AYALA OVALLE

Se decide sobre el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, Doctor Andrés Zahir Carillo Trujillo, visible de los folios 22 a 28 del cuaderno de medida cautelar, contra la decisión adoptada el 14 de septiembre de 2018 (fls.19-21 *Cuaderno medida cautelar*), que dispuso negar la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. GNR 266586 de 24 de julio de 2014, por medio de la cual se le reconoció una pensión de vejez a favor del demandado.

Como fundamento del recurso indica, que la Resolución GNR 266586 del 24 de julio de 2014, mediante la cual reconoce y ordena el pago de una pensión de vejez a favor del señor Ayala Ovalle, va en contravía con lo ordenado en sentencia C-1024 de 2004, habida consideración que al realizar un estudio de las semanas cotizadas por el demandado, se evidenció que no cumple con el requisito de los 15 años de servicios al 1º de abril de 1994, toda vez que para dicha fecha solo contaba con 6 años, 9 meses y 11 días de tiempo de servicios.

Señala, que se el señor Prudencia Ayala Ovalle, no conserva el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ni tampoco es dable la aplicación del régimen establecido en el Decreto 758 de 1990, por lo que atendiendo la solicitud de suspensión provisional se encuentra ajustada a derecho.

Finaliza, realizando un análisis acerca de la buena fe subjetiva, objetiva y del enriquecimiento sin causa, concluyendo que el traspaso de dineros por parte de Colpensiones de forma injustificada, fue de Buena Fé, toda vez que existe una obligación por parte del acto acusado y que es objeto de legalidad dentro del presente asunto, por lo que el pago de lo no debido se le puede hallar la obligación de restituir lo recibido indebidamente por parte de la entidad, por lo que se encuentra configurado el detrimento patrimonial de Colpensiones, en el pago de la mesada pensional que no tiene derecho el demandado.

De acuerdo con lo anterior, el Profesional del Derecho arguye, que el reconocimiento de la pensión de la cual se solicita la nulidad, fueron expedidas en contravía de la constitución y la ley, lo que afectaría el lleno del ordenamiento jurídico, por lo que solicita la suspensión provisional de la resolución que ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez.

Concluye, señalando que se configura un perjuicio inminente de la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, en la medida que se debe disponer de un flujo permanente de recursos que permita su mantenimiento y adecuado funcionamiento, y el continuar con el pago de una prestación a favor de una persona que no acredita todos los requisitos para sí reconocimiento, afecta gravemente su capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que si tienen derecho a su reconocimiento, vulnerando como consecuencia el principio de progresividad y el acceso a las pensiones de los colombianos.

CONSIDERACIONES

i. De la procedencia del recurso de reposición

El artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé:

***“Artículo 242. Reposición.** Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”*

De conformidad con el artículo transcrito, se tiene que la decisión adoptada y que hoy cuestiona la parte demandante es susceptible del recurso de reposición y se precisa que el mismo fue presentado dentro del término legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código General del Proceso.

ii. Decisión del Despacho

En providencia anterior el Juzgado se ocupó de valorar el contenido normativo de las disposiciones jurídicas que involucran la solicitud de la suspensión provisional contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; de la misma manera, realizó un estudio para determinar si existía o no violación de las disposiciones invocadas por la parte demandante.

Debe señalar el Despacho, que el recurso interpuesto por la actora nuevamente hace alusión a los argumentos esbozados con la solicitud de la medida provisional, los cuales ya fueron objeto de estudio en la providencia recurrida.

Además, en dicha providencia se estudió la procedencia de la medida cautelar invocada, de conformidad con lo señalado en el artículo 231 del CPACA, y se realizó una confrontación de los actos demandados y las normas superiores señaladas como vulneradas concluyéndose así, que al no demostrarse una violación de las disposiciones invocadas como violadas, no se podría acceder al decreto de la medida cautelar, habida consideración que, el traslado del régimen no ocurrió por voluntad propia, sino por decisión unilateral del empleador, subsanándose el error por parte de la entidad empleadora, aclarando que los trabajadores no perdían su régimen así como tampoco los derechos adquiridos.

Al respecto, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, señala:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, **cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”

Negrilla y subraya fuera de texto

Del contenido de la norma *up supra* se establece, que no podría el Suscrito decretar la medida cautelar sin un análisis riguroso de las pruebas aportadas, hecho que surge del estudio del fondo del asunto como en efecto se plasmó en el auto objeto del presente recurso.

Ahora cabe señalar que, el objetivo de la medida solicitada por la entidad accionante lleva consigo la suspensión de los pagos que se vienen efectuando al demandado en virtud de la pensión de vejez que viene devengando desde el año 2014, hecho mismo que sólo se evidencia con el estudio de las pruebas obrantes en el proceso, por las cuales se acreditan los supuestos facticos alegados por ambas partes. Es por ello, que éste Despacho Judicial no accedió a tal solicitud, habida consideración, y como se dijo en líneas anteriores, no se acreditó la violación de las disposiciones invocadas como violadas tal y como lo preceptúa el artículo 231 del CPACA, y el acceder a la suspensión provisional de los actos acusados, daría lugar a la afectación del mínimo vital del señor Prudencio Ayala Ovalle.

Además, no puede perderse vista, que una de las principales cualidades que trajo la Ley 1437 de 2011, en materia de medidas cautelares, es precisamente que el **Juez debe analizar la sustentación de la medida y estudiar las pruebas**, porque no basta con una infracción ostensible o directa, como así lo consagraba el Decreto 01 de 1984.¹

¹ “ARTÍCULO 152. Modificado por el art. 31, Decreto Nacional 2304 de 1989 El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los

Es por lo anterior, que no es posible para el Despacho, de conformidad con las pruebas aportadas al plenario, acceder a la medida cautelar, pues ello implicaría la suspensión de los efectos de los actos administrativos y la vulneración directa del derecho al mínimo vital del señor Ayala Ovalle.

En gracia de discusión, el argumento que endilga la parte actora, se sustenta en el traslado de régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida que tuvo el accionado, por lo que según la entidad, el señor Prudencio Ayala, no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, por cuanto el mismo, y según lo expone la entidad accionante, no reúne los requisitos exigidos por el artículo 36 de la ley 100 de 1993, así como tampoco aquellos establecidos en el Decreto 758 de 1990; sin embargo, el Despacho observa que el anterior cargo, no se cifra en una actuación fraudulenta o de mala fe del señor Prudencio Ayala Ovalle, sino por el contrario, en un supuesto error por parte de COLPENSIONES.

Así las cosas, la suspensión de los efectos del acto de reconocimiento de la pensión, conllevaría al no pago de la mesada pensional del demandado, lo cual podría significar la adopción de una medida desproporcionada en perjuicio de un sujeto de especial protección constitucional, violándole de esta manera el derecho al mínimo vital.

En virtud de lo anterior, considera éste Estrado Judicial que no hay lugar a decretar la medida cautelar solicitada y por lo tanto se mantendrá la decisión tomada mediante providencia de data 14 de septiembre de 2018, por la cual se dispuso negar la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA,**

RESUELVE

PRIMERO. NO REPONER la providencia proferida el 14 de septiembre de 2018, por medio de la cual se negó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado, presentada por el apoderado judicial de la entidad demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. Se reconoce personería jurídica al abogado **ANDRÉS ZAHIR CARRILLO TRUJILLO**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.082.915.789 de Santa Marta y portador de la tarjeta profesional de abogado número 267.746 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad y para

siguientes requisitos: 1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida. 2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”.

los efectos señalados en el poder obrante a folio 21 del expediente en calidad de apoderado sustituto de la parte actora.

TERCERO. Se reconoce personería jurídica al abogado **GONZALO HEBERTH BURBANO ORDOÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 16.341.503 de Tuluá y portador de la tarjeta profesional de abogado número 22.329 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad y para los efectos señalados en el poder obrante a folio 56 del expediente en calidad de apoderado judicial de la parte demandada.

CUARTO. Una vez ejecutoriado el presente proveído, por secretaría **ÚNASE** el presente expediente con el cuaderno principal e ingrese nuevamente al Despacho, para proferir la decisión que corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez



JUZGADO VEINTISEÍS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **9 DE ABRIL DE 2019**,
a las ocho de la mañana (8:00 .m.)

LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA

